



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION  
SECRETARIA PARLAMENTARIA  
DIRECCION SECRETARIA  
MESA DE ENTRADAS

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

# TRAMITE PARLAMENTARIO

**PERIODO 1999**

**N° 228**

**Jueves 10 de febrero de 2000**

---

## SUMARIO

---

### I

#### PODER EJECUTIVO

- 1.—Mensaje 127 y proyecto de ley tendiente a agilizar el cobro de créditos por parte del fisco (120-P.E.-99). (Presupuesto y Hacienda y Justicia.) (Página 8465.)
- 2.—Mensaje 137 y proyecto de ley destinado a combatir la evasión tributaria y previsional (121-P.E.-99). (Presupuesto y Hacienda, Finanzas, Previsión y Seguridad Social y Legislación General.) (Página 8467.)

### II

#### DIPUTADOS

- 3.—Becerra y otros: de declaración. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga las partidas necesarias para finalizar las obras de pavimentación de la ruta nacional 3 en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (6.843-D.-99). (Transportes, Obras Públicas y Presupuesto y Hacienda.) (Pág. 8475.)
- 4.—Di Cola: de ley. Suspender por el término de ciento ochenta días hábiles judiciales la ejecución de los juicios por las sumas de dinero adeudadas por los adjudicatarios del Banco Hipotecario S.A. (6.844-D.-99). (Finanzas y Vivienda...) (Página 8476.)
- 5.—Zacarias: de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la conformación de la Comisión Federal de Impuestos en los años 1997-1999, participación de los representantes de la provincia de Entre Ríos, y otras cuestiones conexas (6.845-D.-99). (Presupuesto y Hacienda.) (Pág. 8477.)
- 6.—Gómez de Marelli y Solmoirago: de resolución. Expresar preocupación por la incorporación al gobierno de Austria de un partido político de orientación neonazi (6.846-D.-99). (Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garantías.) (Pág. 8478.)
- 7.—Curlletti de Wajsfeld y Carrió: de ley. Creación del Programa de Fortalecimiento del Empleo Rural —PFER— (6.847-D.-99). (Legislación del Trabajo y Agricultura y Ganadería.) (Pág. 8479.)
- 8.—Ortega de Aráoz y otros: de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la posición de nuestro país frente al gobierno de coalición con

integrantes neonazis de Austria (6.848-D.-99). (Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garantías.) (Pág. 8480.)

- 9.—Avala: de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado actual de las obras de los Bajos Submeridionales en la provincia del Chaco (6.849-D.-99). (Obras Públicas e Intereses Marítimos...) (Pág. 8481.)
- 10.—García y otros: de ley. Régimen para el recálculo de las deudas hipotecarias de los créditos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional S.A., creación de una comisión especial del Fondo Nacional de Compensaciones (6.850-D.-99). (Finanzas y Vivienda...) (Pág. 8482.)
- 11.—Ferrero y otros: de resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las acciones realizadas o en trámite para la participación argentina en la "Expo Universal Hannover 2000" (6.851-D.-99). (Relaciones Exteriores y Culto y Comercio.) (Página 8484.)
- 12.—Abella y Grosso: de resolución. Solicitar al gobierno de la provincia de Córdoba disponga la reparación del puente de acceso a la localidad de Las Acequias, en la provincia mencionada (6.852-D.-99). (Transportes y Obras Públicas.) (Página 8485.)

---

### I

#### PODER EJECUTIVO

### 1

Buenos Aires, 10 de febrero de 2000.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley que contempla un conjunto de medidas destinadas a agilizar el cobro de créditos por parte del fisco.

El proyecto prevé la adjudicación de los créditos de que resulte titular la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el entendimiento de que ello sería una herramienta útil para lograr los fines perseguidos, facultando a dicha administración a enajenar, mediante el llamado a licitación pública nacional e internacional, los créditos que posea por el cobro de los tributos, pagos a cuenta de anticipos, accesorios y actualizaciones

Art. 9º — Facúltase al administrador federal de ingresos públicos a desistir de los juicios o a no iniciar la respectiva acción cuando el importe del capital reclamado fuere inferior a la suma de pesos un mil quinientos (\$ 1.500).

Esta facultad comprende a todos los créditos por tributos, derechos, gravámenes o cargas fiscales de cualquier naturaleza cuya gestión de cobro coactivo le competa legalmente o le sea delegada por otros organismos o poderes del Estado nacional.

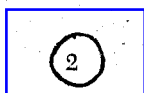
Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FERNANDO DE LA RÚA.

Rodolfo H. Terragno. — José L. Machinea.

— Ricardo R. Gil Lavedra.

—A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia.



121-PE-99  
TP228

Buenos Aires, 10 de febrero de 2000.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley que contempla una serie de medidas tendientes a combatir la evasión tributaria y previsional.

En nuestro país se advierte un índice importante de evasión impositiva, quizás fomentado por una presión fiscal que, comparada con los niveles aplicados en otros países, resulta demasiado elevada.

Por esa razón el gobierno nacional ha decidido adoptar una serie de medidas, entre las cuales se encuentra el proyecto adjunto, tendientes a revertir dicha situación y a reducir al máximo posible el referido índice de evasión.

La estructura del sistema tributario argentino es de características similares a las del resto del mundo, ya que grava el patrimonio, la renta y el gasto o el consumo, con rendimientos comparativos diferentes en cada uno de ellos.

Partiendo de la base de que el problema de la evasión podría estar vinculado con la alta presión fiscal existente, las medidas a ser instrumentadas tienden a evitar ambas situaciones, juntamente con el compromiso insoslayable del Estado nacional de equilibrar las cuentas públicas y de eliminar la corrupción.

En los últimos años se ha avanzado significativamente en la adopción de medidas generales y automáticas de control, de utilización de medios informáticos y de técnicas de fiscalización sin que, no obstante, se haya logrado, hasta ahora, concentrar a la opinión pública acerca de la importancia de que esa información debe ser completa, organizada e interconectada.

Por otra parte, las limitaciones a las transacciones en dinero efectivo que se prevén en el proyecto adjunto, no sólo contribuirán a combatir la evasión fiscal sino que, además, limitarán las posibilidades de "la-

vado" de dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas, evitarán riesgos propios de la manipulación de grandes sumas de dinero en efectivo y alentarán el uso de instrumentos bancarios como medio de pago y la utilización, cada vez más difundida, de las tarjetas de compra y de crédito.

En tal sentido, la propuesta consiste en establecer la inoponibilidad entre las partes y ante terceros de los pagos superiores a pesos diez mil (\$ 10.000), realizados en efectivo. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no reconocerá deducciones o créditos fiscales cuando los pagos hayan sido realizados en efectivo por sumas superiores a la mencionada.

También, se crea la exigencia de identificación tributaria de las partes para la inscripción en los distintos registros de la propiedad (inmobiliaria, automotor, etcétera), instituyéndose también un nuevo instrumento bancario, denominado cheque cancelatorio cuya finalidad consiste en posibilitar la cancelación de obligaciones sin el uso de dinero en efectivo y sin que ello implique riesgo alguno para quien lo cobra.

El cheque cancelatorio es comparable al actual cheque del viajero, en cuanto es emitido por una entidad bancaria, y supera al cheque mencionado en que se elimina el riesgo de falencia de la entidad emisora. Para ello, ésta escindiría de su activo las sumas percibidas para emitir el cheque y las convertirá en patrimonio fiduciario, con lo cual dichas sumas no se verán afectadas en caso de cesación de pagos de la entidad.

También se crea la obligación de utilizar medios electrónicos que permitan la medición y control de la actividad primaria, en sus tres etapas: producción, industrialización y comercialización, apuntando de ese modo a eliminar la evasión en este sector.

Uno de los beneficios que se esperaba lograr con la existencia del régimen de capitalización, creado en el marco del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a cargo de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones fue que, a través del mismo, se redujera el nivel de evasión previsional.

En los hechos ese propósito no se ha alcanzado. En efecto, durante el mes de noviembre de 1999, del total de 7.800.480 afiliados a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, sólo el 45,7 % (3.564.784), efectuó sus aportes. Es decir que la evasión superó el 50 %.

La recaudación total del referido régimen durante el período comprendido entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999 alcanzó a \$ 4.380.000.000. Teniendo en cuenta el grado de evasión, puede estimarse la misma en una cifra similar.

Estimando que por cada peso que recaudan las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, el sistema de reparto a cargo del Estado recibe un peso y medio, la pérdida de recaudación, con directa incidencia sobre el déficit del sistema previsional puede estimarse en no menos de \$ 6.000.000.000 anuales.

Estos datos tornan necesario y perentorio mejorar el nivel de eficiencia en la recaudación del sistema previsional privado, para lo cual el presente proyecto prevé que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones participarán en la recaudación de aportes y contribuciones, y otorga a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y a la Administración Nacional de la Seguridad Social legitimación activa para promover juicios ejecutivos por el cobro de las deudas de todos los componentes de la contribución unificada de la seguridad social (CUSS), tanto en concepto de aportes personales como de contribuciones patronales. Cabe señalar que en la actualidad la ejecución de las deudas de que se trata, con excepción de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y del Régimen Nacional de las Obras Sociales que se encuentran legalmente habilitadas para ello, es una atribución exclusiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Asimismo la propuesta contempla un régimen especial simplificado para la determinación y percepción de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social, para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción.

Esta actividad posee características organizativas peculiares, ligadas fundamentalmente a su estructura en torno a proyectos específicos de duración acotada y a las modalidades de contratación de mano de obra a través de pequeñas empresas subcontratistas de poca solvencia patrimonial y en las que se verifica una alta rotación de personal con baja calificación.

Estas características unidas a la importancia del trabajo en el sector y a la elevada presión impositiva, dan lugar a la presencia, en dichas empresas, de altos niveles de evasión previsional y del llamado "trabajo

en negro", dificultando la aplicación de procedimientos estandarizados de cobro y fiscalización de las cargas sociales:

En este contexto, la aplicación de modalidades simplificadas de determinación y cobro de los aportes y contribuciones a la seguridad social, resultan deseables tanto desde la perspectiva del organismo recaudador, que se beneficiará con la reducción del costo administrativo y la más sencilla fiscalización, como para la administración fiscal en razón de resultar menos costosa su aplicación. Asimismo, bajarán los costos ligados al cumplimiento tributario de los pequeños y medianos contribuyentes, quienes verán disminuidos los costos administrativos y el tiempo empleado para la determinación y pago de sus obligaciones.

La propuesta adjunta está orientada a formular un sistema simplificado para la determinación y pago de la imposición sobre el trabajo aplicable a las empresas de la construcción que en función de su facturación anual sean definidas como pequeñas y medianas. Además, el sistema se adapta a los usos y prácticas comerciales vigentes en el ámbito de la construcción (modalidades de contratación, de pagos, etcétera), define criterios objetivos y sencillos para determinar las empresas contratistas y subcontratistas del sector que pasarán a ser administradas según el régimen simplificado, faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos para fijar los valores salariales referenciales mensuales para el cálculo de los impuestos y contribuciones a la seguridad social, del personal bajo relación de dependencia de dichas empresas y constituye a las empresas de la construcción, no sujetas al régimen simplificado, en agentes de determinación y retención de la obligación previsional sustitutiva creada.

El siguiente cuadro muestra el proceso de simplificación que el proyecto implica:

	Situación actual	Situación propuesta	Hay simplificación
Modalidad de liquidación del impuesto	Autoliquidación por parte de la pyme	Liquidación por terceros en base a parámetros fijados por la AFIP	Máxima
Base imponible	Real	Presunción administrativa	Máxima
Agentes de retención	Existen	No existen	Sí. No será necesario contrastar los montos retenidos con los declarados por las pymes
Agentes de determinación y percepción	No existen	Existen	Sí. Se determina el impuesto presuntivamente
Costo administrativo del cumplimiento			

	Situación actual	Situación propuesta	Hay simplificación
—Del sujeto obligado (pyme)	Muy elevado, por tratarse de autodeterminación	Mínimo pues sólo está obligado a informar número y categoría de trabajadores y horas trabajadas	Máxima
—De terceros (agentes de retención y/o determinación)	Sin cambios	Sin cambios	No
—De la AFIP	Sin cambios	Sin cambios	No
Dificultad de fiscalización	Máxima, pues hay que auditar pymes que autodeclaran bases reales	Mínima pues sólo se auditan cápitas en los lugares de trabajo	Máxima

En otro orden de cosas, cabe hacer referencia al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, el cual constituye el instrumento adecuado para la fijación de las pautas y los estándares técnicos necesarios para el cruzamiento de la información, con miras a obtener una mayor eficacia en los resultados de los programas fiscales y sociales.

Asimismo, el éxito de los objetivos del SINTyS sólo se logrará en la medida en que éstos puedan ser extendidos al ámbito de todo el territorio nacional; motivo por el cual se estima necesario invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al mismo, a través de la firma de los respectivos convenios.

En materia de exportación de cigarrillos y combustibles, se prevé la aplicación de sanciones al exportador cuando se constatare que la declaración efectuada por el mismo difiere de lo que resulta de la comprobación realizada por el servicio aduanero.

En cuanto al régimen de consolidación de deudas impositivas y previsionales recientemente aprobado, se propone la eliminación del actual sistema de bloqueo fiscal, que impide a la Administración Federal de Ingresos Públicos revisar declaraciones juradas anteriores, siempre que el contribuyente hubiera liquidado y abonado correctamente los impuestos correspondientes al último ejercicio. La eliminación de dicho bloqueo constituirá un fuerte incentivo para regularizar el pago correspondiente a todos los ejercicios no prescritos.

En razón de todo lo expuesto, se eleva a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley adjunto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 137

FERNANDO DE LA RÚA.

Rodolfo H. Terragno. — José L. Machinea.

— Mario A. Flamarique.

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

## CAPÍTULO I

### *Limitación a las transacciones en dinero efectivo*

#### *Del medio de pago*

Artículo 1º.—No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos diez mil (\$ 10.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, que no fueran realizados mediante:

1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques.
4. Tarjetas de crédito.
5. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo nacional.

El deudor no incurrirá en mora si el acreedor no hubiera indicado de manera fehaciente su voluntad de recibir el pago mediante alguna de las modalidades indicadas precedentemente o si no hubiera identificado una cuenta en una entidad financiera por ante la cual se pueda realizar el pago.

Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modificaciones, o que fueren realizados por orden judicial en los expedientes que en sede judicial tramiten.

Art. 2º.—Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acrediten la veracidad de las operaciones.

En el caso del párrafo anterior, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo nacional, dentro del primer año de vigencia de la presente ley, podrá reducir el importe previsto en el artículo 1º a pesos cinco mil (\$ 5.000).

#### *De los registros*

Art. 4º — Incorpórase como artículo 3º bis de la ley 17.801 el siguiente:

Artículo 3º bis: No se inscribirán o anotarán los documentos mencionados en el artículo 2º inciso a), si no constare la clave o código de identificación de las partes intervinientes otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, de corresponder.

Art. 5º — Sustitúyense el inciso e) y el apartado 2 del inciso g) del artículo 20 del decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467, por los siguientes textos:

e) Nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, domicilio, documento de identidad, y clave o código de identificación otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también razón social, inscripción, domicilio y clave o código de identificación, en el caso de las personas jurídicas.

g)

2. De transferencia de dominio, con los datos personales o sociales, domicilio, documentos de identidad y clave o código de identificación del adquirente.

Art. 6º — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 1º inciso b) del anexo A de la ley 19.170, el siguiente texto:

Se efectuará anotación provisoria por el plazo que fije la reglamentación, de aquellos documentos en que no constare la clave o código de identificación de las partes intervinientes, otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, de corresponder.

#### *Del cheque cancelatorio*

Art. 7º — El cheque cancelatorio es un documento emitido por un banco en las condiciones que fija la presente ley y constituye por sí mismo un medio idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero, teniendo los mismos efectos que los previstos para dichas obligaciones en el Código Civil.

Art. 8º — El cheque cancelatorio debe extenderse en fórmulas que satisfagan las condiciones de seguridad,

tipo de moneda y demás requisitos que establezca el Banco Central de la República Argentina y contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones:

1. La denominación "cheque cancelatorio" inserta en su texto.
2. El número del cheque.
3. El nombre del banco emisor y el domicilio de pago.
4. La firma de, por lo menos, dos funcionarios del banco.
5. La indicación del lugar y fecha de emisión.
6. El importe, expresado en letras y números y clase de moneda.
7. El nombre del solicitante a cuya orden se emite.

Art. 9º — El cheque cancelatorio produce los efectos del pago desde el momento en que se hace tradición del mismo al acreedor, a quien se le transmite mediante endoso nominativo. Serán admisibles, además, hasta dos (2) endosos nominativos. Los endosos serán certificados por escribano público o autoridad judicial.

Art. 10. — El banco librador deberá extender estos cheques a cualquier persona que se lo requiera, cumpliendo los recaudos que establezca el Banco Central de la República Argentina. El precio total a percibir por el banco librador será de una suma fija que establecerá el Banco Central de la República Argentina en su reglamentación y que no podrá exceder en ningún caso el veinticinco centésimos por ciento (0,25 %) del valor del cheque.

Art. 11. — El cheque cancelatorio será liquidado a la vista y debe ser presentado para su liquidación al banco emisor por su tenedor legitimado.

Art. 12. — El banco emisor de un cheque cancelatorio no podrá compensar la liquidación de dicho instrumento con ninguna acreencia que tenga contra el tenedor legitimado que lo presente a su liquidación.

Art. 13. — Las sumas percibidas por las emisiones efectuadas en forma autónoma de cheques en los términos del artículo 10 del presente capítulo, se constituirán en patrimonio fiduciario del banco, afectado exclusivamente al pago de los cheques cancelatorios emitidos, con exclusión de cualquier otra obligación de la entidad aun en caso de quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la misma, ni formarán parte de los activos y pasivos en caso de que resulte de aplicación el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras.

El pago de los cheques no se verá afectado por la suspensión de operaciones a que se refiere el artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Este podrá exigir que el importe de los cheques que se emitan sea depositado y mantenido mientras se encuentren en circulación, en una cuenta especial abierta en esa institución.

Art. 14. — En cuanto no se encuentre expresamente previsto en esta ley y, en la medida en que no se opongan a ella, se aplicarán supletoriamente las disposiciones sobre cheques comunes contenidas en la Ley de Cheques —anexo I a la ley 24.452— y sus modificaciones o complementarias.

Art. 15. — La autoridad de aplicación del presente capítulo será el Banco Central de la República Argentina, quien deberá dictar las normas correspondientes, inclusive el procedimiento para el caso de extravío o sustracción, en el plazo de treinta (30) días de promulgada la presente ley.

## CAPÍTULO II

### *Sistema de medición de producción primaria*

Art. 16. — Todas las plantas industriales de faenamiento de hacienda vacuna tendrán la obligación, para su funcionamiento, de incorporar sistemas electrónicos de medición y control de la producción, de conformidad con las normas que dicten las respectivas autoridades de aplicación.

Facúltase a la autoridad de aplicación a establecer sistemas electrónicos de medición y control de la producción, para otras especies de origen animal y vegetal.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán autoridad de aplicación del presente artículo, debiendo establecer los procedimientos que permitan obtener y analizar la información contenida en los sistemas precedentemente enunciados, a efectos de mejorar los controles fiscales respectivos.

Los responsables que incumplan con la obligación dispuesta en el presente artículo serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, o de las sanciones que determine la autoridad de aplicación respectiva.

Art. 17. — El Ministerio de Economía, establecerá el sistema previsto en este capítulo dentro del plazo de treinta (30) días de la vigencia de la presente, pudiendo incorporar un régimen de excepciones para pequeños productores o emprendimientos de estructura familiar.

## CAPÍTULO III

### *Sobre el régimen de recaudación y ejecución fiscal de los aportes y contribuciones previsionales*

Art. 18. — La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) delegará en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la realización de determinadas funciones o actividades en materia de aplicación, recaudación y fiscalización de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS). Dicho organismo establecerá la forma y condiciones de la referida delegación. La normativa que al efecto se dicte resultará de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, las cuales quedarán sujetas, respecto de tal accionar, a la supervisión y control de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Sin perjuicio de las facultades propias de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, tendrán

asimismo legitimación activa para promover el juicio de ejecución fiscal que contempla el capítulo XII, artículos 92 y siguientes de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, contra el empleador que omitiera ingresar, en tiempo y forma, el aporte personal de la contribución unificada de la seguridad social que se encuentra obligado a retener a sus empleados; pudiendo accionar directamente u otorgar poder a mandatarios externos.

Será título suficiente para habilitar la vía de ejecución fiscal la boleta de deuda que expida la Administración Federal de Ingresos Públicos. La citada boleta incluirá la totalidad de los tributos contenidos en la contribución unificada antes mencionada, con excepción de aquellos cuya ejecución no corresponda a la citada Administración Federal y comprenderá el total adeudado, sea de uno o varios períodos correspondientes a la nómina salarial declarada.

Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos así lo requiera, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán promover judicialmente la ejecución de dichas deudas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá promover por sí misma la ejecución fiscal de los importes mencionados en el párrafo anterior, con cargo a dichas entidades.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para extender el procedimiento de cobro establecido en el presente artículo a los trabajadores autónomos que no realizaren sus aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Asimismo, queda facultado para integrar en el crédito reclamado los montos correspondientes a las cuotas omitidas al sistema establecido en la Ley sobre Riesgos del Trabajo (ley 24.557).

En ningún caso las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones instituidas por la ley 24.241 y sus modificatorias, los abogados que las representen o patrocinen, los martilleros o demás auxiliares de la Justicia, podrán reclamar al Estado nacional el cobro de suma alguna por los gastos incurridos, honorarios o cualquier otro concepto con motivo de sus actuaciones. Dichas erogaciones, como así también las costas y gastos del juicio, deberán ser afrontadas únicamente por el deudor ejecutado.

Art. 19. — Ratifícase el decreto 863 de fecha 27 de julio de 1998.

## CAPÍTULO IV

### *Régimen especial simplificado para la determinación y percepción de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social para las pequeñas y medianas empresas constructoras*

#### *Sujetos y objeto*

Art. 20. — Establécese un régimen especial simplificado para la determinación, percepción y pago de los aportes y contribuciones que, por su personal en relación de dependencia y con destino al Sistema Único de Seguridad Social, efectúen las empresas constructoras, con facturación anual inferior a los pesos

doce millones (\$ 12.000.000) y que actúen como contratistas o subcontratistas de la industria de la construcción, para la realización de las obras indicadas en el artículo 21 y conforme a los requisitos, plazos y condiciones que se indican en la presente ley.

Se entenderá por subcontratista a quien actúe como cesionario total o parcial y a cualquier título, de quien sea contratista de una empresa constructora para la construcción de una obra de ingeniería o arquitectura.

Art. 21. — Quedan comprendidas en el régimen que por la presente ley se instaura, las empresas indicadas en el artículo 20, cualquiera fuera su forma jurídica, incluidas las empresas unipersonales, las uniones transitorias de empresas o cualquier otra forma de asociación, que actúen como locatarias en las locaciones que se indican a continuación:

- a) Locaciones encuadradas en el inciso a) del artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. A estos fines deberán agruparse todas las obras contratadas entre las mismas partes "comitente y contratista" en la medida en que las fechas de ejecución de los respectivos contratos estén comprendidas en el mismo período ya sea parcial o totalmente;
- b) Obras públicas sobre inmuebles de cualquier naturaleza (obras, instalaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación). A estos fines constituyen obras públicas aquellas cuya realización sea encomendada por cualquiera de los poderes del Estado (nacional, provinciales o municipales), sus entes descentralizados y/o autárquicos, las empresas y sociedades contempladas en el artículo 1º de la ley 22.016, y demás entes que tengan delegadas atribuciones o competencias públicas por expreso mandato legal, cualquiera sea su forma organizativa, incluidas las concesionarias de obras y servicios públicos.

#### *Agentes de determinación y retención*

Art. 22. — Aquellas empresas que por su volumen de facturación anual quedan excluidas del régimen especial simplificado, tendrán a su cargo la responsabilidad de calcular, determinar y retener la obligación previsional sustitutiva creada por esta ley que corresponda a sus contratistas y subcontratistas.

Esta obligación solamente alcanzará a las empresas constructoras, cualquiera fuere su forma jurídica, incluidas las empresas unipersonales, las uniones transitorias de empresas o cualquier otra forma de asociación, que de acuerdo con su último balance y estado de resultados hubieran tenido una facturación anual igual o superior a los pesos doce millones (\$ 12.000.000).

En ningún caso la aludida obligación se hace extensiva a firmas, cualquiera fuere su forma jurídica y monto de facturación, que no pertenezcan a la industria de la construcción.

Art. 23. — Cuando el contratista principal fuere una empresa de la industria de la construcción, que por su facturación anual quede comprendida en el régimen

especial simplificado, la determinación de los aportes y contribuciones sustitutivos según este régimen se limitará a los correspondientes a su personal propio bajo relación de dependencia. En este caso, la contratista principal no tendrá obligación alguna de actuar en calidad de agente de determinación y retención de las obligaciones correspondientes a sus subcontratistas. Cada subcontratista deberá autodeterminar su obligación según los procedimientos del régimen especial simplificado y efectuar el ingreso de la obligación previsional sustitutiva de acuerdo con las disposiciones que, a tal efecto, instrumente la Administración Federal de Ingresos Públicos.

#### *Exclusión del régimen*

Art. 24. — El presente régimen especial simplificado no será de aplicación respecto de aquellos contratistas o subcontratistas de la industria de la construcción, incluidas las uniones transitorias de empresas, que —según su último balance y estado de resultados— hubieran tenido una facturación anual igual o superior a los pesos doce millones (\$ 12.000.000).

Estas empresas continuarán determinando y pagando los aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social, según las leyes y disposiciones del régimen general.

Art. 25. — El presente régimen especial simplificado no será de aplicación respecto de aquellos contratistas o subcontratistas, excepto las uniones transitorias de empresas, que acrediten no revestir el carácter de empleadores obligados a cumplimentar el ingreso de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social, por no contar con personal en relación de dependencia.

#### *Obligación previsional sustitutiva - Obligaciones comprendidas*

Art. 26. — Los ingresos que se originen como consecuencia de la aplicación del presente régimen especial simplificado para las empresas contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, sustituyen el pago de las siguientes obligaciones referidas a los recursos de la seguridad social:

- a) La contribución a cargo del empleador al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- b) La contribución a cargo del empleador con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;
- c) La contribución a cargo del empleador con destino al régimen de asignaciones familiares;
- d) La contribución a cargo del empleador con destino al Fondo Nacional del Empleo;
- e) La contribución a cargo del empleador con destino al régimen nacional de obras sociales;
- f) La contribución a cargo del empleador con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud;
- g) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;



- h) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;
- i) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al régimen nacional de obras sociales;
- j) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud.

*Oportunidad en que corresponde practicar la determinación y retención*

Art. 27. — Las empresas que en virtud de lo previsto por el artículo 22 de la presente ley deban actuar como agentes de determinación y retención de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social respecto del personal de las empresas contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, deberán efectuar la determinación, retención e ingreso al fisco de los correspondientes importes, con una periodicidad mensual y según los plazos y modalidades que, a tal efecto, instrumente la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Art. 28. — Cuando los importes determinados, retenidos e ingresados al fisco por las empresas en virtud del régimen especial simplificado, correspondan a trabajos en curso de ejecución respecto de los cuales no se hubieren extendido aún a sus contratistas y subcontratistas los certificados de recepción definitivos, tales importes constituirán un crédito a favor del agente de determinación y retención, que podrá descontarse de los pagos que deba efectuar a sus contratistas en oportunidad de producirse la certificación definitiva de recepción de conformidad del trabajo ejecutado por aquéllos.

Art. 29. — Cuando los importes determinados, retenidos e ingresados al fisco por las empresas en virtud del régimen especial simplificado, correspondan a trabajos realizados dentro de un mismo período mensual y respecto de los cuales se hubieran extendido los certificados de aprobación definitivos, tales importes serán considerados pagos definitivos de las obligaciones del contratista o subcontratista devengadas durante dicho lapso.

Art. 30. — Las empresas que deban actuar como agentes de determinación y retención en virtud del régimen especial simplificado, serán solidariamente responsables de las obligaciones de sus contratistas y subcontratistas emergentes de la aplicación del régimen instaurado por la presente ley y del cumplimiento por parte de éstos del aporte que corresponda con destino al Fondo de Desempleo de la Industria de la Construcción. La inscripción de los contratistas y subcontratistas en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, no exime de la responsabilidad solidaria ante las obligaciones de la presente ley.

Art. 31. — Las empresas de la industria de la construcción no obligadas a actuar como agentes de determinación y retención conforme el presente régimen es-

pecial simplificado, deberán autodeterminar, con periodicidad mensual, sus obligaciones correspondientes al personal propio bajo relación de dependencia y efectuar el ingreso de las obligaciones al fisco, en los plazos y formas que a tal efecto fije la Administración Federal de Ingresos Públicos.

*Cálculo de las obligaciones emergentes del régimen especial simplificado. Base de la obligación sustitutiva*

Art. 32. — El cálculo de las obligaciones emergentes del presente régimen deberá efectuarse, obligatoriamente, cada vez que el comitente de la locación y/o el agente de determinación y retención efectúen pagos totales o parciales aplicables a la locación contratada. A tal efecto, si el comitente no es una empresa perteneciente a la industria de la construcción o, siéndolo, no es agente de determinación y retención del presente régimen, corresponderá a la contratada autodeterminar e ingresar al fisco las obligaciones emergentes del presente régimen, siempre y cuando ella sea una empresa constructora y su facturación anual en el último ejercicio económico resultara inferior a los pesos doce millones (\$ 12.000.000). Si el comitente y la contratada son empresas constructoras con facturación anual en su último ejercicio económico inferior a los pesos doce millones (\$ 12.000.000), el primero será el responsable de determinar, retener e ingresar al fisco el monto de las obligaciones correspondientes a la segunda.

Art. 33. — La periodicidad de las obligaciones del presente régimen es mensual. Todo ingreso al fisco que se efectúe antes de las fechas de vencimiento fijadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sea que provenga de autodeterminación del contribuyente o de determinación por parte de un agente de determinación y retención, será considerada un pago a cuenta de las obligaciones comprendidas en el régimen especial simplificado y devengadas durante dicho mes.

Art. 34. — La base de la obligación previsional sustitutiva será calculada, al sólo efecto del régimen especial simplificado, para cada trabajador de la industria de la construcción que actúe bajo relación de dependencia, como el producto de los valores salariales mensuales referenciales por categoría laboral, que serán fijados por la autoridad de aplicación, dentro de los ciento ochenta (180) días de la promulgación de la presente, por un coeficiente cuyo numerador estará dado por la cantidad de días trabajados por el operario y el denominador por el número treinta (30).

Art. 35. — La obligación previsional sustitutiva correspondiente a cada trabajador de la industria de la construcción que actúe bajo relación de dependencia, surge como el producto de la base imponible determinada según el procedimiento previsto en el artículo 34 por las tasas de imposición diferenciadas regionalmente existentes. Deberán aplicarse en cada caso las tasas de imposición correspondientes a la región en que se sitúa el emplazamiento físico de las obras en las que prestan servicios los trabajadores,

**Art. 36.** — La sumatoria de las obligaciones previsionales sustitutivas individuales determinadas según el procedimiento contemplado en los artículos 34 y 35 constituye:

- a) La obligación previsional sustitutiva total que las empresas constructoras, en su carácter de agentes de determinación y retención del régimen especial simplificado, estarán obligadas a determinar y percibir de sus contratistas y subcontratistas con la periodicidad y procedimientos detallados en esta ley y las que se establezcan por vía reglamentaria;
- b) La obligación previsional sustitutiva total que las empresas constructoras comprendidas en el régimen deban determinar para el personal propio que actúe bajo relación de dependencia.

**Art. 37.** — A los efectos del cálculo de la obligación previsional sustitutiva, las empresas contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción comprendidas en el régimen, quedan obligadas a suministrar a la empresa constructora contratista principal:

- a) El listado nominativo de su personal identificado según número de Clave Unica de Identificación Laboral (CUIL) y organizado según las categorías laborales fijadas en el anexo de la presente ley;
- b) El detalle de la cantidad de días trabajados por cada trabajador integrante del listado nominativo antes mencionado, durante el período de devengamiento de la obligación y las fechas de las altas y bajas que se hubieran producido en relación al mismo durante tal período.

Asimismo, deberán presentar a la empresa constructora contratista principal constancia de haber depositado el correspondiente aporte a cargo del empleador con destino al Fondo de Desempleo de la Industria de la Construcción.

**Art. 38.** — Las empresas constructoras que conforme la presente ley deban actuar como agentes de determinación y retención de sus contratistas y subcontratistas, efectuarán una contribución adicional equivalente al dos por ciento (2 %) del monto de la obligación previsional sustitutiva total determinada, en calidad de pago a cuenta de los conceptos de los recursos de la seguridad social sustituidos, para ser aplicado al personal propio de tales contratistas que no cumpla tareas en forma directa en las obras objeto de contratación.

El pago a cuenta calculado y retenido según lo dispuesto en este artículo no genera en ningún caso saldo a favor de las retenidas.

**Art. 39.** — Los importes recaudados a través del régimen especial simplificado serán distribuidos entre los distintos sistemas y regímenes enunciados en el artículo 26, de acuerdo a la proporción que establezca la reglamentación.

**Art. 40.** — Establécese que el régimen que se crea por el capítulo IV de la presente ley, regirá a partir del

dictado de la reglamentación del mismo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

## CAPÍTULO V

### *Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)*

**Art. 41.** — Ratifícase la creación del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). El Poder Ejecutivo nacional deberá dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente, dictar la reglamentación pertinente.

**Art. 42.** — Los organismos de la administración pública nacional, centralizada o descentralizada, guardarán en cada caso la obligación de confidencialidad que en virtud de las leyes especiales que los regulan resulte aplicable.

**Art. 43.** — El gobierno nacional suscribirá con los estados provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los convenios destinados a poner en funcionamiento en las respectivas jurisdicciones, sistemas de información complementarios al SINTyS, estableciéndose mecanismos de interacción entre ellos.

**Art. 44.** — El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), se integrará con la información proveniente, entre otros, de: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Registro Nacional de las Personas, Inspección General de Justicia, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de Buques, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Registros Públicos de Comercio, Sistema Unico de Identificación y Registro de las Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM), Padrón Unico de Beneficiarios de los Programas Sociales (PUBPS), Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y organismos provinciales, previo convenio de adhesión.

**Art. 45.** — La Jefatura de Gabinete de Ministros, como organismo rector del sistema y previa consulta a los entes mencionados en el artículo 44, establecerá las pautas y los estándares técnicos necesarios para posibilitar el intercambio y cruzamiento de datos entre los organismos públicos mencionados en el artículo precedente, preservando los principios de privacidad, confidencialidad y seguridad.

## CAPÍTULO VI

### *Exportación de cigarrillos y combustibles*

**Art. 46.** — Cuando en las exportaciones de cigarrillos y combustibles líquidos se constatare que la declaración efectuada por el exportador difiere de lo que resulta de la comprobación realizada por el servicio aduanero, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por los ilícitos que se hayan cometido, se impondrá al exportador una multa igual a cinco (5) veces el importe de los impuestos internos y el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural que se hubiesen eximido y/o reintegrado en caso de haber pasado inadvertida la maniobra.

En los casos en los que las mercaderías a las que se refiere el párrafo anterior fuesen sometidas a la destinación suspensiva de tránsito de exportación, contemplada en los artículos 374 al 385 del Código Aduanero, la sanción allí prevista será aplicable cualquiera que fuere el lugar en el que se produzca la constatación, sea tanto en la aduana en la que se ha formalizado la destinación de exportación, como en la aduana de salida, o bien en el trayecto que ha seguido la mercadería entre ambas.

Será título suficiente para habilitar la vía de ejecución fiscal la boleta de deuda que expida la Administración Federal de Ingresos Públicos.

## CAPÍTULO VII

### Otras disposiciones

Art. 47. — Derógase, a partir del 1º de julio de 2000 inclusive, el régimen especial de fiscalización previsto en el capítulo XIII de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y los artículos 24, 25 y 26 del anexo de la ley 21.977.

Lo dispuesto precedentemente produce también efectos respecto de las fiscalizaciones a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Economía que se encuentren en curso a la mencionada fecha.

Art. 48. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## ANEXO: CATEGORIAS LABORALES

Artículo 1º — El régimen especial simplificado para la industria de la construcción será aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios en empresas constructoras en calidad de: albañiles; frentistas; carpinteros de encofrado y armadores de hierro; pintores y limpiadores de frentes; yeseros; fumistas; picapedreros y graniteros; calefactonistas y gasistas; electricistas de obras; plomeros y cloaquistas; mosaiquistas; colocadores de vidrios; colocadores de revestimientos de cualquier tipo; caleros; elaboradores de ladrillos; mineros de la construcción; canteristas; colocadores de techos; colocadores de cielo raso; marmolistas; pulidores aserradores de mármol; conductores de vehículos automotores; operarios de máquinas utilizadas en la industria de la construcción; dinamiteros, perforistas, cargadores de tirca, encendedores de mechas y accionadores de detonadores eléctricos; calcheros; colocadores de elementos de carpintería de madera o metálica; carpinteros de hormigón armado; mecánicos en general, engrasadores y soldadores.

Art. 2º — Al solo efecto del cálculo y determinación de las obligaciones emergentes de los capítulos IV y V de la presente ley, los trabajadores en relación de dependencia que se desempeñen en empresas constructoras en cualesquiera de las funciones detalladas en el artículo 1º de este anexo o en funciones asimilables a las allí detalladas que reciban una denominación distinta, serán agrupados en las siguientes categorías laborales:

*Categoría A.* Obreros de la construcción que no cuenten con capacidades y aptitudes para desarrollar

las tareas enunciadas en el artículo anterior con algún nivel de especialización, pudiendo desempeñarse solamente en tareas generales auxiliares que hacen a la función o tarea principal, o bien que cuenten con nivel de capacitación y aptitud que los habilite para desarrollar tareas con un grado de complejidad limitado al propio de los trabajos de: mampostería gruesa; contrapisos; revoques gruesos; hechura de tableros; puntales con cabeza; entablar, apuntalar y acuñar; doblar y cortar hierros menores; preparar los diversos tipos de mezcla para albañilería; manejar máquinas que se utilicen en la industria de la construcción con potencia inferior a 160 HP y martinetes o guinches para montacarga o martillo neumático.

*Categoría B.* Trabajadores con capacidades y aptitudes para desarrollar adicionalmente a las tareas enunciadas precedentemente, las de: nivelar, aplomar, colocar marcos, ventanas y revestimientos en general, mampostería en general y contrapisos; fajas de revoque; revoque grueso y fino o con material de frente; impermeabilizaciones en general; nivelar, armar y colocar columnas, vigas, dinteles y entablar; hacer escaleras; interpretar planos y planillas de hierro; hacer y colocar estribos y doblado de hierro en general; empalmar hierro; conducir camiones; manejar tractores, motoniveladores, topadoras, excavadoras y otras máquinas con potencia superior a 160 HP; y los que posean conocimientos de mecánica en general.

*Categoría C.* Trabajadores con capacidades y aptitudes para leer planos referidos a su especialidad, para interpretarlos y ejecutar todas aquellas tareas que, potencialmente, se deriven de la posesión de estas capacidades, como la de replantear obras similares.

*Categoría D.* Trabajadores que, satisfaciendo los requerimientos de aptitud planteados para la categoría C, tengan responsabilidad de comandar y supervisar las tareas de grupos de trabajadores encuadrados en las anteriores categorías laborales.

*Categoría E.* Trabajadores con estudios secundarios completos, no encuadrables en las categorías precedentes, en relación de dependencia cualquiera sea la forma jurídica de las empresas incluidas las unipersonales, las uniones transitorias de empresas, u otra forma de asociación.

FERNANDO DE LA RÚA.

Rodolfo H. Terragno. — José L. Machinea.

— Mario A. Flamarique.

— A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas, de Previsión y Seguridad Social y de Legislación General.

## II

### DIPUTADOS

3

### Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

### DECLARA:

Como necesario y esencial, para la integración territorial de la Nación, dotar a la obra de pavimentación